

1. La AEPD inicia una investigación de oficio tras detectar posibles filtraciones masivas de datos en la plataforma de una entidad bancaria. Durante las actuaciones de investigación, el personal inspector precisa recabar la identificación de las direcciones IP desde las que se realizaron ciertos accesos fraudulentos al sistema para identificar a los presuntos responsables. De acuerdo con el artículo 52.3 de la LOPDGDD:

- a) Los operadores deben ceder estos datos siempre que el requerimiento de la AEPD sea motivado, independientemente de si el denunciado es persona física o jurídica.
- b) La cesión de datos de IP y abonado por parte de los operadores de comunicaciones electrónicas requiere obligatoriamente y en todo caso previa autorización judicial.
- c) La cesión de estos datos requerirá la obtención de autorización judicial salvo que las actuaciones se inicien por denuncia de un afectado respecto de la conducta de una persona jurídica.
- d) La AEPD tiene potestad para acceder a estos datos sin control judicial previo por su condición de autoridad administrativa independiente de control.

2. La Presidencia de la AEPD detecta que una Consejería de Sanidad autonómica está tratando datos genéticos sin las medidas de seguridad adecuadas. Tras verificar que esta materia es competencia de la autoridad de protección de datos de dicha comunidad autónoma, la AEPD decide intervenir. Según el artículo 59 de la LOPDGDD:

- a) La AEPD podrá sancionar directamente a la Consejería al tratarse de categorías especiales de datos de salud.
- b) La AEPD podrá requerir a la autoridad autonómica para que adopte medidas de cesación en un mes, pudiendo acudir a la vía contencioso-administrativa si no se atiende.
- c) El requerimiento de cesación debe ser atendido en un plazo máximo de quince días hábiles por la autoridad autonómica competente.
- d) La autoridad estatal carece de competencia para requerir a los organismos de comunidades autónomas que posean su propia autoridad de control.

3. En relación con el régimen sancionador de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale cuál de las siguientes conductas se tipifica correctamente como una infracción de carácter leve:

- a) El tratamiento de datos de carácter personal de las categorías especiales a las que se refiere el Reglamento UE dos mil dieciséis barra seiscientos setenta y nueve sin que concurra ninguna de las circunstancias de excepción legalmente previstas.
- b) El incumplimiento por parte de los corresponsables del tratamiento del deber de formalizar el acuerdo que determine sus funciones y responsabilidades respecto al tratamiento de datos de los interesados.
- c) No designar un delegado de protección de datos cuando sea exigible su nombramiento de acuerdo con la normativa vigente o no posibilitar su efectiva participación en las cuestiones de protección de datos.
- d) No poner a disposición de los afectados los aspectos esenciales del acuerdo formalizado entre los corresponsables del tratamiento, conforme exige el artículo veintiséis punto dos del Reglamento UE dos mil dieciséis barra seiscientos setenta y nueve.

4. Un Ayuntamiento planea implementar un sistema de reconocimiento de voz para que los ciudadanos puedan consultar el estado de sus expedientes. Al ser un sistema no previsto en la Ley 39/2015, se deben seguir pasos específicos. Conforme al artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015:

- a) El sistema será eficaz desde el mismo momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
- b) Se requiere una comunicación previa a la Secretaría de Estado de Seguridad y esperar un plazo de quince días para su validación.
- c) El Ayuntamiento deberá realizar un registro previo de los usuarios y comunicar el sistema a la Delegación del Gobierno con un mes de antelación.
- d) Requiere comunicación previa a la Secretaría General de Administración Digital y que transcurran dos meses desde dicha comunicación para ser eficaz.

5. Según establece el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta respecto a la traducción de documentos al castellano: [Tema 2-12]

- a) Deberá traducirse únicamente cuando el interesado lo solicite motivadamente ante el órgano instructor del procedimiento administrativo regional. [Tema 2-12]
- b) Será obligatoria cuando el documento deba surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma con lengua cooficial propia. [Tema 2-12]
- c) Siempre será preceptiva la traducción al castellano cuando el procedimiento se tramite por vía de urgencia por razones de interés público. [301, Tema 2-12]
- d) Todas las anteriores son correctas.

6. Un ciudadano posee procedimientos abiertos en tres ministerios diferentes y una agencia estatal. Para facilitar su gestión, desea utilizar los servicios electrónicos de la Administración. De acuerdo con el artículo 43.4 de la Ley 39/2015, sobre el Punto de Acceso General electrónico:

- a) Es un servicio de uso facultativo para la Administración, que solo está obligada a ofrecerlo a las personas jurídicas obligadas a la vía electrónica.
- b) Solo permite el acceso a las notificaciones que hayan sido emitidas por departamentos de la Administración General del Estado en exclusiva.
- c) Funciona como un portal de acceso que centraliza la entrada a todas las notificaciones del interesado que se encuentren en las sedes de los diversos emisores.
- d) Los interesados deben registrarse individualmente en cada una de las sedes electrónicas para que sus notificaciones aparezcan en el Punto de Acceso General.

7. Un órgano superior dicta una orden de inicio de un procedimiento sancionador tras recibir una denuncia interna. El instructor designado debe verificar que la orden cumple con los requisitos legales mínimos. Según el artículo 60.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

- a) La orden de inicio emitida por el superior jerárquico solo debe contener los hechos que motivan la incoación y la posible sanción propuesta.
- b) Es suficiente con que la orden de inicio identifique de forma genérica al órgano competente y la norma que le atribuye la potestad sancionadora.
- c) La orden expresará, en la medida de lo posible, los presuntos responsables, las conductas, su tipificación y el lugar y fechas de los hechos.
- d) El contenido de la orden superior tiene carácter meramente orientativo para el instructor, quien podrá modificar los hechos imputados libremente.

8. Un particular sufrió daños patrimoniales directos por la aplicación de una norma tributaria que posteriormente fue declarada contraria al Derecho de la Unión Europea por una sentencia publicada ayer. Según el artículo 67.1 de la Ley 39/2015: [294, Tema 2-12]

- a) Prescribirá al año desde la publicación en el BOE o el DOUE de la sentencia que declare el carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. [Tema 2-12]
- b) Será de dos años contados desde que se produjo el daño efectivo por la aplicación de la norma que ha sido declarada ilegal posteriormente. [Tema 2-12]
- c) El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración en el plazo de seis meses desde que se publique la firmeza de la sentencia judicial. [Tema 2-12]
- d) Está sujeto a un plazo de caducidad de tres meses desde que el interesado tenga conocimiento efectivo de la sentencia del tribunal europeo. [Tema 2-12]

9. Se dicta una resolución que declara la caducidad de una licencia de actividad por inactividad prolongada del titular. La Administración decide imponer restricciones adicionales. Conforme al artículo 69.4 de la Ley 39/2015:

- a) Se puede determinar la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo fijado por la ley.
- b) La resolución de caducidad impide en todo caso que el interesado vuelva a solicitar la misma licencia durante el resto de su vida laboral.
- c) El plazo máximo de prohibición para iniciar un nuevo procedimiento será de cinco años en todos los casos de declaración de caducidad.
- d) No se pueden imponer limitaciones al derecho de solicitud del interesado salvo que existan procedimientos sancionadores previos con resolución firme.

10. Durante la tramitación de un expediente de subvención, se concede al interesado un plazo para subsanar errores. El interesado presenta la documentación dos días después de vencer el plazo, pero la Administración aún no ha dictado la resolución de cierre del trámite. Según el artículo 73.3 de la Ley 39/2015:

- a) La actuación es nula de pleno derecho por haberse producido fuera del término legalmente establecido por la norma reguladora.
- b) El interesado decae automáticamente en su derecho al trámite sin posibilidad de subsanación posterior al vencimiento del día señalado.
- c) Solo producirá efectos legales si el interesado justifica documentalmente que el retraso se debió a causas de fuerza mayor imprevistas.
- d) Se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produce antes o el mismo día de la notificación de la resolución de fin de plazo.

11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, una vez acordada la realización de actuaciones complementarias en un procedimiento administrativo, ¿en qué plazo máximo deben estas practicarse?

- a) En un plazo no superior a diez días hábiles contados desde la notificación del acuerdo de realización de las mismas.
- b) En el plazo improrrogable de siete días naturales tras la finalización del periodo de alegaciones del interesado.
- c) En un plazo no superior a quince días.
- d) En el plazo que determine el instructor según la complejidad de la prueba, sin que en ningún caso pueda exceder de un mes.

12. Un procedimiento de concesión de una licencia urbanística compleja lleva paralizado cuatro meses por falta de un documento que debe aportar el solicitante. La Administración considera que el asunto es clave para el planeamiento. Según el artículo 95.4 de la Ley 39/2015:

- a) La caducidad es obligatoria y automática tras cumplirse tres meses de paralización del expediente por causa imputable al interesado.
- b) El archivo de actuaciones es la única vía legal posible para evitar que se produzca el silencio administrativo de carácter positivo.
- c) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general o sea conveniente su definición.
- d) La caducidad solo puede evitarse si el interesado solicita formalmente una ampliación de plazo antes del vencimiento del periodo de advertencia.

13. De acuerdo con el artículo 114.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿qué actos de los órganos directivos de la Administración General del Estado ponen fin a la vía administrativa?

- a) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
- b) Todos los actos dictados por Directores Generales, independientemente de la materia sobre la que versen.
- c) Únicamente los actos dictados por el Subsecretario del Departamento en materias de gestión económica.
- d) Los actos de los Directores Generales solo si cuentan con el visto bueno del Ministro del Departamento.

14. Según establece el artículo 120.1 de la Ley 39/2015, cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo:

- a) La Administración deberá resolverlos todos simultáneamente en un plazo no superior a tres meses.
- b) El órgano administrativo suspenderá de oficio todos los recursos hasta que se dicte una sentencia firme en vía penal.
- c) Si se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa, el órgano podrá suspender el plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
- d) No cabe la suspensión del plazo para resolver en vía administrativa bajo ningún concepto de prejudicialidad.

15. Conforme a la documentación técnica de la UPV, ¿qué condiciones deben cumplirse de forma acumulativa para que un empleado pueda firmar o cifrar un correo electrónico desde Microsoft Outlook?

- a) Disponer de certificado digital, conexión VPN activa y validación previa por el servicio de informática.
- b) Disponer de un certificado digital válido, que esté instalado localmente y que la dirección de correo configurada coincida estrictamente con la del certificado.
- c) Basta con poseer un certificado reconocido por la ACCV y estar dado de alta en la red UPVNET sin necesidad de instalación local.
- d) El uso de Outlook Web App (OWA) es el único requisito previo para garantizar la firma y cifrado de mensajes salientes.

16. En relación con los requerimientos de software para el acceso a la Sede Electrónica de la UPV detallados en el temario, señale la opción correcta:

- a) Se garantiza el soporte oficial completo para dispositivos móviles basados en los sistemas operativos Android e iOS.
- b) El sistema es compatible únicamente con las versiones de Windows posteriores a Windows 10 para garantizar la seguridad.
- c) El documento se centra en el soporte para sistemas operativos de escritorio como Windows, Linux (Ubuntu) y MacOS, sin mencionar explícitamente el soporte para sistemas móviles.
- d) Es obligatorio el uso de navegadores basados en tecnología Chromium para poder ejecutar la aplicación AutoFirma.

17. De acuerdo con el artículo 9.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ¿cómo debe adoptarse el acuerdo de delegación de competencias de un órgano colegiado cuando el ejercicio de dicha competencia requiere un quórum o mayoría especial?

- a) Deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría especial.
- b) Podrá adoptarse por mayoría simple, siempre que el acuerdo de delegación sea posteriormente ratificado por el órgano superior.
- c) El quórum especial solo se exige para el ejercicio de la competencia, no para su delegación en otro órgano.
- d) No es posible delegar competencias que requieran quórum o mayorías reforzadas según la normativa vigente.

18. En el ámbito de los órganos colegiados de la Administración General del Estado, según el artículo 19.5 de la Ley 40/2015, ¿de qué plazo disponen los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario para formular un voto particular?

- a) Deberán anunciarlo en la misma sesión y formalizarlo por escrito antes de la aprobación del acta de la siguiente reunión.
- b) El voto particular debe formularse necesariamente de forma verbal en el momento de la votación para constar en acta.
- c) Dispondrán de un plazo de cinco días hábiles desde la celebración de la sesión para remitirlo a la Secretaría.
- d) Podrán formularlo por escrito en el plazo de dos días, y se incorporará al texto aprobado.

19. De conformidad con el artículo 29.6 de la Ley 40/2015, se entiende por infracción continuada aquella que consiste en:

- a) Una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando una idéntica ocasión.
- b) La persistencia en una conducta infractora a pesar de haber sido sancionado previamente por resolución firme en vía administrativa.
- c) El mantenimiento en el tiempo de una situación ilegal derivada de un acto administrativo nulo de pleno derecho.
- d) La comisión de dos o más infracciones de distinta naturaleza en un periodo de tiempo inferior a un año.

20. Según establece el artículo 32.5 de la Ley 40/2015, para que los particulares tengan derecho a ser indemnizados cuando la lesión sea consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, ¿qué requisitos deben cumplirse?

- a) Que la norma sea de rango legal y que el daño sea superior al 10% del patrimonio del interesado.
- b) Solo se requiere que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE declare expresamente la retroactividad de sus efectos.
- c) Que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares, el incumplimiento esté suficientemente caracterizado y exista una relación de causalidad directa con el daño.
- d) Que el particular haya agotado previamente todas las vías de recurso administrativo contra el acto de aplicación de la norma.

21. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 40/2015, en las Comunidades Autónomas uniprovinciales donde no exista el cargo de Subdelegado del Gobierno:

- a) El Delegado del Gobierno asumirá las competencias que la ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
- b) Las competencias serán ejercidas por el Secretario General de la Delegación en régimen de suplencia permanente.
- c) Dichas competencias pasarán a ser ejercidas por el órgano competente de la administración autonómica correspondiente.
- d) El Gobierno de la Nación deberá nombrar obligatoriamente a un Director Insular para cubrir dichas funciones.

22. De acuerdo con el artículo 84.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta correcta respecto a la creación de entidades en el sector público estatal:

- a) El Consejo de Ministros puede crear organismos con regímenes jurídicos especiales no previstos en la ley mediante Real Decreto motivado.
- b) Las Universidades Públicas pueden crear fundaciones con cualquier forma jurídica privada para la gestión de sus activos.
- c) La Administración General del Estado no podrá crear ni controlar entidades que no se ajusten a las tipologías previstas taxativamente en la Ley.
- d) Se permite la creación de sociedades mercantiles con participación mayoritaria pública que se rijan exclusivamente por el derecho canónico en misiones humanitarias.

23. Según establece el artículo 114.1.c) de la Ley 40/2015, ¿cuál es la consecuencia de la falta de aprobación del plan de actuación por causa imputable a una sociedad mercantil estatal?

- a) La disolución automática de la sociedad y el cese de todos sus administradores en el plazo de tres meses.
- b) La imposibilidad de contratar con cualquier administración pública hasta que se subsane la deficiencia documental.
- c) La paralización de las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado que la sociedad tuviera derecho a percibir.
- d) El inicio de un procedimiento de transformación obligatoria de la sociedad en organismo autónomo.

24. En relación con la transmisión de datos entre administraciones públicas, el artículo 155.3 de la Ley 40/2015 establece que, si la Administración cesionaria solicita la compatibilidad para una nueva finalidad y no recibe comunicación en plazo por parte de la cedente:

- a) La cesionaria no podrá emplear los datos para la nueva finalidad hasta que la cedente comunique su decisión.
- b) Se entenderá concedida la compatibilidad por silencio administrativo positivo tras transcurrir diez días.
- c) El uso de los datos se considerará lícito si la cesionaria emite una declaración responsable de necesidad.
- d) Deberá solicitarse autorización judicial previa a la Agencia Española de Protección de Datos.

25. La Conselleria de Innovación de la Generalitat Valenciana está redactando los pliegos para la contratación de un nuevo sistema de gestión de licencias náuticas. Con el fin de cumplir con el principio de transparencia desde el diseño, el órgano de contratación debe asegurar la disponibilidad de los datos. Según el artículo 40.7 de la Ley 1/2022:

- a) La inclusión de estas cláusulas es meramente facultativa y dependerá del informe previo de la Abogacía de la Generalitat.
- b) Se deben incluir obligatoriamente cláusulas de datos abiertos en los instrumentos jurídicos para garantizar la liberación efectiva de los conjuntos de datos.
- c) Únicamente se incluirán estas cláusulas si el valor estimado del contrato es superior a los umbrales de regulación armonizada europea.
- d) Las cláusulas de datos abiertos solo son exigibles en los convenios de colaboración con universidades, quedando excluidos los contratos de suministros.

26. De acuerdo con el artículo 41.2 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, ¿cuál de los siguientes se identifica como un objetivo fundamental de la reutilización de la información pública?

- a) Permitir a la ciudadanía un mejor conocimiento de la actividad del sector público valenciano.
- b) Favorecer la creación de productos y servicios de información basados en los datos de libre disposición.
- c) Favorecer la competencia en el mercado y limitar su posible falseamiento.
- d) Todas las anteriores son correctas.

27. Una empleada de una institución pública valenciana interpone una demanda alegando que se le ha denegado el acceso a un curso de especialización por razón de su sexo, aportando indicios de que solo se han admitido varones. El órgano administrativo debe defender su actuación. Según el artículo 13.1 de la Ley Orgánica 3/2007:

- a) Corresponde a la empleada demostrar no solo el indicio, sino la intención dolosa de discriminar por parte de su superior jerárquico directo.
- b) La carga de la prueba recae siempre en la Administración, que debe aportar un informe del Instituto de las Mujeres antes de que se dicte la sentencia.
- c) El tribunal presumirá la discriminación salvo que la demandante no pueda acreditar un perjuicio económico evaluable derivado de la exclusión.
- d) Corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y la proporcionalidad de las mismas.

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define correctamente el criterio de integración del principio de igualdad en las políticas públicas según el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?

- a) Los Poderes Públicos integrarán el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, potenciando el crecimiento del empresariado femenino y el valor del trabajo de las mujeres.
- b) La Administración General del Estado integrará el principio de igualdad exclusivamente en las políticas de empleo y servicios sociales, con el fin de reducir la brecha salarial y fomentar la contratación temporal de mujeres en sectores tradicionalmente masculinos, evitando la segregación vertical.
- c) El Gobierno integrará el principio de igualdad de trato de forma transversal en las políticas de defensa y seguridad nacional, con el objetivo de garantizar que la presencia femenina en las fuerzas armadas alcance el cincuenta por ciento en un plazo máximo de cinco años naturales.
- d) Los organismos públicos integrarán el principio de igualdad de oportunidades únicamente en las políticas artísticas y culturales que reciban financiación de la Unión Europea, garantizando que los criterios de adjudicación de subvenciones incluyan siempre la variable de sexo como factor determinante.

29. En virtud del artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2007, respecto al seguimiento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, señale la respuesta correcta:

- a) El Gobierno remitirá anualmente al Defensor del Pueblo un informe detallado sobre las sanciones impuestas a empresas privadas por incumplimiento de planes de igualdad.
- b) Las Cortes Generales elaborarán un informe bienal, previa consulta con el Instituto de las Mujeres, sobre la presencia femenina en los órganos directivos de la AGE.
- c) El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad de este principio, del que dará cuenta a las Cortes Generales.
- d) Es competencia exclusiva del Ministerio de Igualdad la publicación en el BOE de un resumen semestral sobre la reducción de la brecha salarial en el sector público.

30. Una empresa de 150 trabajadores está en proceso de elaboración de su Plan de Igualdad. La dirección se niega a facilitar los datos de la auditoría salarial a los representantes de los trabajadores alegando confidencialidad comercial. Según establece el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007:

- a) La dirección de la empresa está legalmente obligada a facilitar todos los datos e información necesarios para la elaboración del diagnóstico en el seno de la Comisión Negociadora.
- b) Solo se deben facilitar datos estadísticos agregados que no permitan identificar los niveles salariales de los diferentes grupos profesionales del catálogo de la empresa.
- c) La empresa puede denegar la información si no existe un acuerdo previo de confidencialidad firmado por todos los miembros del comité de empresa y el delegado sindical.
- d) El diagnóstico es una potestad exclusiva de la empresa, por lo que la representación legal de los trabajadores solo tiene derecho a ser informada una vez esté finalizado.

31. El Gobierno central decide actualizar las políticas públicas dirigidas a la protección integral de las víctimas de violencia de género para asegurar una tutela eficaz. Se requiere una coordinación entre el Observatorio Estatal y el órgano impulsor. De acuerdo con el artículo 2.f) de la LO 1/2004:

- a) La coordinación de estas políticas corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad en colaboración con los servicios sociales de las diversas comunidades autónomas.
- b) El sistema de tutela institucional será dirigido por el Consejo General del Poder Judicial en funciones de auxilio a la Administración General del Estado.
- c) El Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer tiene la competencia exclusiva para dictar las instrucciones de obligado cumplimiento para las entidades locales.
- d) La Administración General del Estado impulsará estas políticas a través de la Delegación Especial del Gobierno, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer.

32. De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cuáles son las características y requisitos mínimos del Plan Estatal de Sensibilización y Prevención que el Gobierno debe poner en marcha?

- a) El Plan tendrá una duración limitada de cuatro años prorrogables por otros dos, contará con una dotación presupuestaria específica en los Presupuestos Generales del Estado y se centrará exclusivamente en el ámbito educativo de la educación secundaria obligatoria, evitando el tratamiento intercultural.
- b) Se pondrá en marcha un Plan con carácter rotatorio entre las distintas Comunidades Autónomas, con financiación compartida al cincuenta por ciento, que deberá introducir escalas de valores basadas en la tolerancia cero y centrarse en el ámbito laboral para reducir la vulnerabilidad económica de las víctimas.
- c) Se pondrá en marcha un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género con carácter permanente, con la consiguiente dotación presupuestaria, que introduzca valores de igualdad y respeto desde la perspectiva de las relaciones de género y esté dirigido tanto a hombres como a mujeres.
- d) El Gobierno aprobará un Plan de choque extraordinario cada vez que se produzca un repunte en las estadísticas anuales de víctimas, garantizando que la formación de los profesionales sea voluntaria y que el control del plan recaiga únicamente en el Ministerio de Justicia.

33. El Ministerio de Educación está renovando la composición del Consejo Escolar del Estado para cumplir con el mandato de igualdad de la LO 1/2004. Una asociación de defensa de los derechos de la mujer solicita formalmente su inclusión. Según el artículo 8 de dicha ley:

- a) La representación en el Consejo Escolar del Estado queda limitada a los sindicatos de enseñanza más representativos y a las confederaciones nacionales de padres y madres.
- b) La presencia de organizaciones de mujeres es facultativa y dependerá de que exista una vacante en el cupo destinado a personalidades de reconocido prestigio docente.
- c) Solo pueden formar parte del Consejo Escolar del Estado las asociaciones de mujeres que tengan su sede principal en la ciudad de Madrid para facilitar las reuniones.
- d) En el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres.

34. Un Juez de Violencia sobre la Mujer dicta una sentencia condenatoria que incluye medidas de protección para la víctima y sus hijos. El condenado anuncia la interposición de un recurso de apelación y solicita la suspensión de dichas medidas. Según el artículo 69 de la LO 1/2004:

- a) Las medidas judiciales de protección y seguridad podrán mantenerse durante la tramitación de los recursos, debiendo constar este extremo expresamente en la sentencia.
- b) Las medidas quedarán automáticamente suspendidas en cuanto se admita a trámite el recurso de apelación para garantizar el derecho a la presunción de inocencia.
- c) El mantenimiento de las medidas tras la sentencia requiere que el Ministerio Fiscal solicite una pieza separada de medidas cautelares en un plazo de cuarenta y ocho horas.
- d) Solo podrán mantenerse las medidas de carácter económico, debiendo cesar inmediatamente cualquier restricción a la libertad de movimientos del condenado.

35. Un tribunal español debe resolver un litigio donde una norma de una Ley de presupuestos nacional entra en contradicción directa con lo dispuesto en un Tratado Internacional válidamente celebrado y publicado. Según la jerarquía de fuentes establecida en el Tema 18:

- a) El tribunal debe aplicar la Ley nacional por ser posterior en el tiempo y gozar de la legitimidad democrática directa de las Cortes Generales.
- b) Los Tratados Internacionales tienen rango reglamentario, por lo que nunca pueden prevalecer sobre una norma con rango de ley formal de las Cortes.
- c) La Constitución española otorga a los Tratados Internacionales el mismo rango que a la propia Constitución, por lo que el tribunal debe anular la Ley.
- d) Los tratados son supralegales, por lo que prevalecen sobre la ley en caso de conflicto, pero son infraconstitucionales, al no poder contradecir la Constitución.

36. Las Cortes Generales aprueban una ley que regula una materia sobre la que no existe reserva de ley constitucional expresa. Posteriormente, el Gobierno pretende modificar un detalle técnico de esa regulación mediante un Reglamento. De acuerdo con los principios del Tema 18:

- a) Se ha producido una reserva de ley material que impide definitivamente cualquier intervención del Reglamento en esa materia específica.
- b) Se ha producido una reserva de ley formal por "congelación de rango", lo que impide que un Reglamento posterior pueda modificar lo establecido en la Ley.
- c) El Gobierno puede modificar la ley mediante reglamento siempre que justifique razones de urgencia y necesidad bajo el control del Consejo de Estado.
- d) La reserva de ley formal solo opera en materias de derechos fundamentales, por lo que el reglamento puede derogar la ley anterior libremente.

37. De acuerdo con el criterio de consunción normativa establecido en el Tema 19, ¿qué diferencia fundamental existe entre un reglamento y un acto administrativo?

- a) El acto administrativo se agota con su cumplimiento, mientras que el reglamento se mantiene vigente para una serie indeterminada de supuestos.
- b) El reglamento tiene una eficacia limitada a un caso concreto, mientras que el acto administrativo innova el ordenamiento jurídico.
- c) Ambas figuras se agotan con su primera aplicación efectiva, requiriendo una nueva publicación para volver a surtir efectos.
- d) El acto administrativo es siempre una norma de carácter general, mientras que el reglamento es una resolución de carácter particular.

38. Ante una situación de catástrofe natural que requiere una respuesta normativa inmediata, la Administración dicta una disposición de carácter general. Según las clases de reglamentos estudiadas:

- a) Se trata de un reglamento ejecutivo que debe contar obligatoriamente con el dictamen preceptivo del Consejo de Estado.
- b) Es un reglamento independiente que solo puede regular materias organizativas internas de la propia Administración.
- c) Se trata de un reglamento de necesidad, que tiene vigencia temporal y puede suspender normas legales mientras dure la crisis.
- d) Es una disposición nula de pleno derecho por vulnerar el principio de jerarquía normativa al ser contraria a la ley.

39. En relación con los límites sustanciales de la potestad reglamentaria, el ordenamiento jurídico administrativo establece respecto a la irretroactividad que:

- a) Los reglamentos pueden tener efectos retroactivos siempre que beneficien al interés general de la Administración.
- b) Existe una prohibición absoluta de aplicar retroactivamente disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- c) La retroactividad es posible en reglamentos jurídicos, pero queda totalmente prohibida en los reglamentos de carácter interno.
- d) Solo el Presidente del Gobierno puede autorizar la retroactividad de una norma reglamentaria mediante Real Decreto.

40. De acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿en qué supuesto estarán sujetos a dicha ley los contratos celebrados por particulares?

- a) Únicamente cuando el contrato sea de obras y su presupuesto supere los cinco millones de euros independientemente de la financiación.
- b) Cuando sean contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores en los casos de regulación armonizada.
- c) En todos los contratos celebrados por personas físicas que reciban cualquier tipo de ayuda pública por mínima que sea.
- d) Los contratos celebrados por particulares nunca están sujetos a la Ley de Contratos, rigiéndose siempre por el Derecho Privado.

41. Según lo establecido en el artículo 72.6 de la LCSP, cuando una sentencia firme imponga una prohibición de contratar pero no fije un plazo específico de duración, ¿cuál será el límite máximo de la misma?

- a) La prohibición tendrá carácter indefinido hasta que el órgano de contratación certifique la rehabilitación del empresario.
- b) El plazo de duración será de un año contado desde la notificación de la sentencia firme al interesado.
- c) La duración no podrá exceder de cinco años en caso de sentencia firme, o de tres años en el resto de supuestos de prohibición.
- d) El plazo será de dos años para infracciones graves y de seis meses para las de carácter leve.

42. Respecto a las funciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), señale el carácter que tienen las instrucciones que esta apruebe:

- a) Tienen carácter meramente informativo y sirven como guía de buenas prácticas no vinculante para los licitadores.
- b) Son vinculantes para las empresas privadas pero facultativas para los órganos de contratación estatales.
- c) Son obligatorias para todos los órganos de contratación del Sector Público del Estado.
- d) Solo son obligatorias para los órganos de contratación de las Comunidades Autónomas que se adhieran voluntariamente.

43. En virtud del artículo 334.5 de la LCSP, ¿quién y cuándo debe realizar la valoración de la aplicación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública?

- a) El Ministerio de Hacienda la realizará anualmente antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
- b) La Oficina de Supervisión de la Contratación la realizará a los seis meses de su entrada en vigor.
- c) El Comité de Cooperación la realizará transcurridos los dos primeros años, pudiendo modificar o ajustar aspectos necesarios.
- d) Las Cortes Generales la realizarán cada cuatro años mediante una ponencia de carácter permanente.

44. Un órgano de contratación de la Administración General del Estado debe publicar un anuncio de licitación de un contrato sujeto a regulación armonizada. Siguiendo la regla de antelación entre el DOUE y el ámbito nacional:

- a) El anuncio debe publicarse obligatoriamente en el Boletín Oficial del Estado al menos tres días antes que en el DOUE.
- b) La publicación en el perfil de contratante tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro medio de publicidad internacional.
- c) Por regla general, no puede publicarse a nivel nacional antes que en el DOUE, salvo que no haya notificación de este tras 48h de confirmar recepción.
- d) El órgano de contratación puede elegir libremente el orden de publicación siempre que ambos anuncios sean idénticos en su contenido.

45. De acuerdo con el artículo 153.3 de la LCSP, en aquellos contratos que sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación, ¿cuándo podrá efectuarse la formalización?

- a) Al día siguiente de la notificación de la adjudicación para garantizar el principio de eficiencia en la gestión pública.
- b) Transcurridos cinco días naturales desde que el adjudicatario reciba el requerimiento de subsanación de documentos.
- c) No podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación.
- d) La formalización es inmediata, sin perjuicio de que se suspenda la ejecución si se interpone efectivamente el recurso.

46. Un contratista incurre en demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de una obra por causas que le son imputables. Según el artículo 193.3 de la LCSP, la Administración podrá imponer penalidades diarias en la proporción de:

- a) 0,10 euros por cada 100 euros del precio total del contrato, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) 2,00 euros por cada día de retraso independientemente del valor del contrato adjudicado.
- c) 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato (IVA excluido).
- d) 50 euros diarios fijos hasta que se produzca la recepción de conformidad de la prestación realizada.

47. ¿Qué consecuencia prevé el artículo 201 de la LCSP para el incumplimiento grave y doloso, por parte del contratista, del pago de los salarios a los trabajadores vinculados al contrato?

- a) La inhabilitación permanente del empresario para contratar con cualquier entidad del sector público internacional.
- b) La resolución automática del contrato y la incautación de la garantía provisional de forma inmediata.
- c) Dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la Ley.
- d) No conlleva sanción económica, pero el contratista deberá presentar un plan de viabilidad en el plazo de diez días.

48. Según el artículo 205.2.c) de la LCSP, una modificación de un contrato administrativo se considerará sustancial cuando:

- a) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que no exceda del 5 por ciento del precio inicial.
- b) Solo afecte a los plazos parciales de ejecución sin alterar la fecha de finalización del objeto contractual.
- c) Tenga como resultado un contrato materialmente diferente al celebrado en un principio.
- d) Sea propuesta por el responsable del contrato para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones existentes.

Soluciones

1	c	El artículo 52.3 establece que estos datos deben ser cedidos previo requerimiento motivado exclusivamente en actuaciones iniciadas por denuncia de un afectado contra una persona jurídica o por sistemas de divulgación sin restricciones. En el resto de supuestos, se requiere autorización judicial.
2	b	Conforme al artículo 59, si la AEPD considera que un tratamiento en competencia autonómica vulnera el Reglamento UE, requerirá a la autoridad para que cese en un mes; si no se atiende, podrá ejercer acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
3	d	Según el artículo 74.i) de la LOPDGDD, constituye infracción leve el no poner a disposición de los afectados los puntos clave del acuerdo formalizado entre corresponsables, a diferencia de la falta de formalización del acuerdo en sí, que es grave.
4	d	El artículo 9.2.c) de la LPACAP exige comunicación previa a la Secretaría General de Administración Digital y una declaración responsable. El sistema solo será eficaz tras dos meses desde dicha comunicación.
5	b	El artículo 15.3 de la LPACAP impone la obligación de traducir al castellano los documentos que deban surtir efectos fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma donde la lengua sea cooficial. [Tema 2-12]
6	c	El artículo 43.4 de la LPACAP define que el Punto de Acceso General electrónico funciona como un portal que facilita el acceso a las notificaciones del interesado centralizando su entrada.
7	c	El artículo 60.2 de la LPACAP dispone que la orden de inicio por orden superior expresará, siempre que sea posible, la identificación de responsables, conductas, tipificación y circunstancias de lugar y fecha.
8	a	Conforme al artículo 67.1 de la LPACAP, el derecho a reclamar prescribe al año de publicarse en el boletín oficial correspondiente la sentencia de inconstitucionalidad o contraria al Derecho de la UE. [Tema 2-12]
9	a	El artículo 69.4 de la LPACAP permite que la resolución determine la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento idéntico durante un periodo de tiempo que debe estar fijado por ley.
10	d	El artículo 73.3 de la LPACAP establece que, aunque se declare el decaimiento, se admitirá la actuación si ocurre antes o el mismo día en que se notifique la resolución que tiene por transcurrido el plazo.
11	c	Según el literal del artículo 87 de la LPACAP, las actuaciones complementarias deben practicarse en un plazo no superior a quince días.
12	c	El artículo 95.4 de la LPACAP prevé la excepción a la caducidad cuando la cuestión afecte al interés general o sea conveniente sustanciarla para su esclarecimiento.
13	a	El artículo 114.2.c) de la LPACAP establece que ponen fin a la vía administrativa los actos emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
14	c	Conforme al artículo 120.1 de la LPACAP, ante una pluralidad de recursos por el mismo acto, si hay un recurso judicial previo contra una resolución o acto presunto, el órgano administrativo puede acordar la suspensión del plazo para resolver hasta el pronunciamiento judicial.
15	b	El documento indica que se deben cumplir tres condiciones: certificado válido, instalación local en el almacén de certificados y coincidencia estricta de la dirección de correo con el campo Subject Alternative Name del certificado.
16	c	La relación de sistemas operativos y navegadores mencionada en el temario se limita a entornos de escritorio como Windows (varias versiones), Linux y MacOS, sin hacer referencia a sistemas operativos de dispositivos móviles.

17	a	El artículo 9.7 de la Ley 40/2015 dispone literalmente que el acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando dicho quórum o mayoría.
18	d	Según el artículo 19.5 de la Ley 40/2015, los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, el cual se incorporará al texto aprobado.
19	a	El artículo 29.6 de la Ley 40/2015 define la infracción continuada como la ejecución de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos, en ejecución de un plan o aprovechando una idéntica ocasión.
20	c	El artículo 32.5 de la Ley 40/2015 exige acumulativamente: que la norma confiera derechos, que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado y que exista relación de causalidad directa entre el incumplimiento y el daño sufrido.
21	a	El artículo 74 de la Ley 40/2015 establece que en las CCAA uniprovinciales, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
22	c	El artículo 84.2 de la Ley 40/2015 impone la prohibición de crear o controlar entidades que no correspondan a los tipos previstos en la ley, asegurando la tipicidad de los organismos públicos estatales.
23	c	El artículo 114.1.c) de la Ley 40/2015 dispone que la falta de aprobación del plan de actuación por causa imputable a la sociedad conlleva la paralización de las aportaciones de los PGE.
24	a	El artículo 155.3 de la Ley 40/2015 aclara que la falta de comunicación por parte de la Administración cedente en el plazo establecido impide a la cesionaria utilizar los datos para la nueva finalidad propuesta.
25	b	El artículo 40.7 de la Ley 1/2022 establece que en los instrumentos jurídicos que regulen relaciones como contratos, convenios o subvenciones, se deben incluir obligatoriamente cláusulas de datos abiertos para garantizar su liberación efectiva.
26	d	El artículo 41.2 de la Ley 1/2022 enumera como objetivos de la reutilización el mejor conocimiento de la actividad pública, la creación de productos de valor añadido y el favorecimiento de la competencia.
27	d	El artículo 13.1 de la LO 3/2007 establece la inversión de la carga de la prueba en alegaciones de discriminación por sexo, obligando al demandado a probar la ausencia de discriminación y la proporcionalidad de sus actos.
28	a	El artículo 14.2 de la LO 3/2007 obliga a integrar la igualdad en el conjunto de políticas (económica, laboral, social, cultural y artística) para evitar la segregación y eliminar brechas retributivas.
29	c	Según el literal del artículo 18 de la LO 3/2007, el Gobierno debe elaborar un informe periódico sobre la efectividad del principio de igualdad y dar cuenta del mismo a las Cortes Generales.
30	a	El artículo 46.2 de la LO 3/2007 dispone que la empresa debe facilitar todos los datos e información necesaria para el diagnóstico en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad.
31	d	El artículo 2.f) de la LO 1/2004 establece que la AGE, mediante la Delegación Especial del Gobierno y en colaboración con el Observatorio Estatal, impulsará las políticas de tutela institucional.
32	c	El artículo 3.1 de la LO 1/2004 define el Plan Estatal de Sensibilización como permanente, con dotación inmediata, perspectiva de género y dirigido a ambos sexos.
33	d	El artículo 8 de la LO 1/2004 exige asegurar la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones de defensa de los intereses de las mujeres en el Consejo Escolar del Estado.

34	a	El artículo 69 de la LO 1/2004 permite el mantenimiento de las medidas de protección y seguridad durante la tramitación de recursos, siempre que se haga constar en la sentencia (Fuente: Conocimiento General de la Ley Orgánica 1/2004, no presente en extractos pero requerida por el input).
35	d	Los tratados internacionales incorporados al derecho español tienen supremacía sobre la ley (supralegales) pero están subordinados a la Constitución (infraconstitucionales).
36	b	La reserva de ley formal ocurre cuando el legislador regula por ley una materia no reservada por la CE, produciendo una "congelación de rango" que impide su modificación por reglamento (Fuente: Tema 18, Principios de Derecho Administrativo).
37	a	El acto administrativo se agota con su cumplimiento (ej. una multa), mientras que el reglamento no se agota, sino que se afirma y mantiene vigente para supuestos indeterminados.
38	c	Los reglamentos de necesidad (contra legem) se dictan ante emergencias y tienen vigencia temporal, pudiendo suspender la vigencia de normas legales durante la crisis.
39	b	Tanto la Constitución como la legislación administrativa prohíben la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o de aquellas que restrinjan derechos individuales.
40	b	El artículo 2.2 de la LCSP establece que están sujetos a la ley los contratos subvencionados por poderes adjudicadores celebrados por particulares en los supuestos de regulación armonizada.
41	c	El artículo 72.6 de la LCSP fija un máximo de cinco años para la prohibición por sentencia firme si no señala plazo, y de tres años para el resto de supuestos.
42	c	El artículo 332.7.d) dispone que las instrucciones de la OIReScon serán obligatorias para todos los órganos de contratación del Sector Público del Estado.
43	c	El Comité de Cooperación en materia de contratación pública realiza la primera valoración a los dos años, permitiendo modificar o ajustar la Estrategia.
44	d	El artículo 135.3 establece la prioridad de publicación en el DOUE, permitiendo excepcionalmente la publicación nacional si no hay notificación tras 48 horas de la confirmación de recepción.
45	c	En contratos con recurso especial, la formalización requiere un periodo de espera de quince días hábiles desde la remisión de la notificación de adjudicación.
46	c	El artículo 193.3 de la LCSP establece penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
47	a	El incumplimiento grave y doloso de las obligaciones salariales da lugar a la imposición de penalidades conforme al artículo 192 de la LCSP.
48	c	Una modificación se tipifica como sustancial cuando da como resultado un contrato materialmente diferente al que fue objeto de licitación original.